

trito definitivamente juzgando en primera instancia así lo sentenció y firmó. Doy fé.
—*Juan Ignacio Fagoaga.*—*Manuel Galindo*, secretario.

Es copia de su original que certifico.
Oaxaca de Juarez, Febrero 14 de 1874.—*Manuel Galindo*.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo 11 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por el súbdito inglés Tomas Hopley Woolrich ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca, contra las disposiciones del Cefe político de Juchitlan que lo despojó de sus derechos como subrogatario de parte de los terrenos de Sarabia y Boca del Monte. Visto el informe de la autoridad responsable; las pruebas rendidas de la parte del peticionario; el parecer fiscal, y el fallo del inferior.

Considerando: que el hecho mismo de declarar caducos los derechos de Woolrich presupone la existencia de estos; que por otra parte está perfectamente comprobada con los documentos fehacientes que obran en autos; que sea lo que fuere de la caducidad de estos derechos por no haber cumplido Woolrich con lo estipulado en el contrato de venta condicional á que esta obligado como subrogatario de los primitivos compradores, esta caducidad solo puede ser declarada por los tribunales comunes, por ser este un asunto contencioso, como rectamente se deduce del Reglamento de 5 de Febrero de 1861.

Que en consecuencia, la autoridad política que decretó el despojo es á todas luces incompetente, de donde resulta la positiva violacion de garantías de que se queja Woolrich; que desde el momento que existe esta violacion, todo individuo á quien ella perjudique directamente, tiene un derecho perfecto é independiente de otro cualquiera para reclamar el amparo de la Justicia fede-

TOMO V.—PARTE II.

ral, siendo por lo tanto absurdo considerar este recurso como subsidiario de los demas que pueda interponer el solicitante.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion, se declara: que es de revocarse y se revoca el fallo pronunciado por el Juez 1º suplente de Distrito del Estado de Oaxaca, y en consecuencia la Justicia de la Union ampara y protege al súbdito inglés Tomas Hopley Woolrich, contra la sentencia del Cefe político de Juchitlan que declaró caducos sus derechos á las fracciones de los terrenos de Sarabia y Boca del Monte á que se refiere el solicitante.

Devuélvanse los autos al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Lic. Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, 21 de Abril de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Morelos, por los CC. José Castillo y Socios, contra la Gefatura política de Yautepec, por violacion de garantías constitucionales.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.
El Promotor fiscal, dice: que como el ob-

jeto de este recurso es impedir la ejecucion de los reglamentos de Guardia Nacional dictados por el Gobierno del Estado, en virtud de que la facultad de expedir esos reglamentos está reservada al Congreso de la Union por la fraccion XIX del artículo 72 de la Constitucion de la República; el informe con justificacion rendido por el C. Gefe político de Yautepec, se limitó á sostener la legitimidad de las facultades con que se dieron tales reglamentos, y á manifestar que los CC. Albino García, Ignacio Navarro y José Castillo, que figuran entre los quejosos, están exceptuados del pago y servicio de Guardia Nacional como funcionarios municipales. Efectivamente aparece del acta adjunta al informe, que los CC. expresados son Síndico el primero, y Jueces menores los demás, del Ayuntamiento de Yautepec; empero en el escrito de queja asientan que fueron cuotizados y recibieron los certificados de excepcion en los que se les previene enterar mensualmente cincuenta centavos el primero, treinta y siete y medio el segundo, y dos pesos el tercero, con la conminacion de que serán consignados al servicio activo del Batallon "Libres de Morelos" si faltan al pago de dos mensualidades; y como el escrito de queja tiene una fecha posterior á la del acta de eleccion, está por esclarecer si realmente fueron cuotizados esos individuos y si se les exige el pago de la contribucion que reclaman. Por otra parte es necesario para que los tribunales federales decidan con pleno conocimiento en este juicio, que conozcan las disposiciones que se dicen ilegalmente dictadas; y como no las ha presentado sino solo citado la autoridad ejecutora en su informe, el Promotor fiscal, reservándose fundar que se conceda ó deniegue el amparo, pide se mande recibir este negocio á prueba por un término comun que no exceda de ocho dias, conforme al artículo 10 de la ley de 20 de Enero de 1869.

Cuernavaca, Febrero 2 de 1874.—*N. Medina.*

Alegato del C. Promotor fiscal.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal, en el recurso de amparo promovido por los CC. Ignacio Navarro, José Castillo, Mariano Abascal, Santiago Muñoz, Albino García y Alejo Barranco, contra la Gefatura política de Yautepec, su estado supuesto que es el de alegar, ante V. dico: que su justificacion se ha de servir declarar que la Justicia de la Union ampara y protege á los quejosos, contra el impuesto de exentos de Guardia Nacional establecida por el reglamento de 13 de Noviembre de 1873, expedido por el Gobierno del Estado, pues con su ejecucion se viola en la persona de aquellos ciudadanos, la garantía que otorga el artículo 16 de la Constitucion de la República, segun consta de las razones legales que paso á exponer.

La fraccion XIX del artículo 72 de la Constitucion de la República establece, que el Congreso de la Union tiene facultad para dar reglamentos con el objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional, reservando á los ciudadanos que la forman el nombramiento respectivo de gefes y oficiales, y á los Estados la facultad de instruirla conforme á la disciplina prescrita en dichos reglamentos.

El Congreso de la Union no ha expedido hasta la fecha esos reglamentos; pero á mi juicio los Estados no pueden considerarse investidos de las facultades reservadas á la autoridad federal, por solo que nose haya hecho uso de esas facultades. Se pretende por la autoridad informante, que las leyes solo se derogan por las disposiciones posteriores que así lo declaren; pero el artículo 126 de la misma Constitucion, establece que como suprema ley de la República, será acatada no obstante las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones y leyes de los Estados. Además, conforme al artículo 117, solo se entienden reservadas á los Estados las facultades que no estén expresamente concedidas á los fun-

cionarios federales, y ya hemos visto que solo se ha reservado á los Estados, con relacion á la Guardia Nacional, la facultad de instruirla conforme á los reglamentos que expida el Congreso de la Union. Ahora bien, es indudable que pertenece á la organizacion de la Guardia Nacional el establecimiento de exenciones y contribuciones de exentos, y nadie fuera del Congreso de la Union puede reglamentar esa materia.

En el Estado, no existe el servicio activo de la Guardia Nacional; y las exenciones de ese servicio que sin solicitarlas se otorgan á todos los CC., son el medio de percibir una contribucion personal odiosa, y cuya cobranza es causa de vejaciones personales. Los arbitrios de que se echa mano para la percepciones y recaudacion de ese impuesto, son verdaderas molestias personales contra las que este Juzgado de Distrito ha otorgado frecuentes amparos. Por otra parte la ley de 15 de Julio de 1848, en la parte que se transcribe en el informe, pugna abiertamente con las prescripciones constitucionales, y por consiguiente no debe observarse. Efectivamente; el artículo 76 dice, que los Congresos y Gobernadores de los Estados podrán expedir disposiciones legislativas y reglamentos para la organizacion de la Guardia Nacional; y el artículo 99 escede la única facultad concedida á los Estados que se refiere á la instruccion de la Guardia Nacional. Además, ni siquiera es exacta la observancia de la ley citada, por que los reglamentos expedidos en el Estado varian las cuotas de la contribucion de exentos y no hay el servicio activo de Guardia Nacional.

Facultad esclusiva pues del Congreso de la Union es expedir esos reglamentos; al hacer uso de ella el Gobierno del Estado, invade la esfera de la autoridad federal é infringe la garantía del artículo 16 de la Constitucion; pues autoridad incompetente, impone á los individuos con la contribucion que fija por exencion, una verdadera molestia en los intereses. Conforme al artí-

culo 101 del mismo Código, la violacion de las garantías individuales, y la invasion en la esfera de la autoridad federal cometida por leyes ó actos de las autoridades de los Estados, son justo motivo de amparo, y con arreglo al artículo 102, el Promotor pide se declare en los términos del principio, y se envíen estos autos á la revision de la Suprema Corte de Justicia.

Cuernavaca, Marzo 2 de 1874.—*Nicolás Medina.*

Son copias que certifico. Cuernavaca, Marzo 11 de 1874.—*Mariano Sansalvador.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Cuernavaca, Marzo 9 de 1874.—Visto este juicio promovido por los CC. José Castillo, Ignacio Navarro, Mariano Abascal, Santiago Muñoz, Albino García y Alejo Barranco, solicitando amparo contra el cobro que se les hace de la contribucion de exentos del servicio de la Guardia Nacional, conforme al Reglamento de 13 de Noviembre de 1873, expedido por el Gobierno del Estado, con arreglo al artículo 3º del Decreto número 70 de la H. Legislatura del mismo, de 26 de Abril del propio año, con lo que crecen violadas en sus personas las garantías de los artículos 14 y 16 de la Constitucion federal, por no ser dichas autoridades competentes para expedir y hacer cumplir este decreto y su reglamento, pues tal facultad solo es propia del Congreso de la Union segun la fraccion 19 artículo 72 de la misma Constitucion; invadiendo las referidas autoridades con esos actos, la esfera federal. Visto el informe con justificacion rendido por la autoridad ejecutora del acto reclamado, en que hace valer la competencia de las supremas autoridades del Estado para dictar dichas providencias, por que siendo una necesidad para la conservacion del orden público la subsistencia de una fuerza armada, y no habiendo el Congreso de la Union ocupádose hasta ahora de dar el reglamento de

Guardia Nacional, el supremo gobierno del Estado se vió en la precision de ordenar en 5 de Mayo de 1861 se organizara dicha guardia con arreglo á la Ley de 15 de Julio de 1848, considerándola vigente mientras la representacion no llene el vacio de la fraccion 19 artículo 72 antes citado, de que procede la facultad que los quejosos niegan al C. Gobernador y á la H. Legislatura del Estado; el pedimento del C. Promotor que quiere se esté á la suprema ley y se tenga por violaciones de ella cualesquiera otras dictadas en contrario, haciendo valer que en realidad no existe en el Estado tal Guardia Nacional, por no merecer ese nombre el Batallon "Libres de Morelos" compuesto de individuos tomados de leva ó consignados por las autoridades subalternas del Gobierno, y que con la contribucion de exentos cuyas boletas se expiden á todos aun sin solicitarlas, lo que existe en realidad es una gavela con la que se molesta á los CC. con violacion del artículo 16 del Pacto federal, por lo que concluye pidiendo se ampare á los quejosos en este sentido.

Considerando: que aunque estos hechos son ciertos y acaso se comete un abuso con la exaccion de la contribucion de exentos, de la que no eximen ni á los empleados federales, hay no obstante una necesidad de sostener para la conservacion del Orden alguna fuerza armada, sin la que la sociedad no puede subsistir, y que á falta del reglamento que no ha dado el Congreso, alguna ley debe suplirlo, como por la Orden de 5 de Mayo de 1861 lo declaró el Supremo Gobierno; por que con la promesa de ese reglamento no debe tenerse por expresa ó tácitamente derogada la ley de 1848 relativa, á la manera que subsisten las alcabalas y aduanas interiores apesar del artículo 124 de la Carta fundamental de la República; que el Gobierno del Estado, como los de otros varios, apoyado en esa suprema declaracion de 5 de Mayo de 1861 y repetida ley de 15 de Julio de 1848, se cree y está de hecho autorizado para la expedicion del reglamen-

to en virtud del cual han sido enotizados los quejosos, con lo que y por las razones dichas, y el espíritu de la misma Constitucion que no puede querer el absurdo de que subsista el Orden público sin el respeto de una fuerza armada, no deben entenderse violadas las garantías que invocan, se declara:

1º Que la Justicia de la Union no ampara ni protege á los CC. José Castillo, Ignacio Navarro, Mariano Abascal, Santiago Muñoz, Albino Garcia y Alejo Barranco, contra la autoridad que los ha enotizado por la contribucion de exentos del servicio de la Guardia Nacional en el Estado.

2º Notifiquese este fallo al apoderado de los quejosos, quienes deberán reponer el papel que sea de reponerse, sin satisfacer la multa de que habla el artículo 16 de la ley de amparos, por no haber obrado con temeridad ni malicia en su solicitud, pues aunque como municipales algunos de ellos estan exentos de estas y otras contribuciones, se les expidió no obstante boleta para el pago de ella.

Hágase saber al representante del Ministerio público, y previa citacion remítase este juicio á la superioridad para su revision, publicándose por la prensa las copias de estilo. Así definitivamente juzgando lo decreté y firmé con los de mi asistencia por falta de secretario.—*Mariano Sansalvador*.—Asistencia.—*Carlos Orellana*.—Asistencia.—*Porfirio Rodriguez*.

Es copia que certifico. Cuernavaca, 11 de Marzo de 1874.—*Mariano Sansalvador*.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo 16 de 1874.—Vistos los autos del juicio de amparo promovido por los CC. José Castillo, Ignacio Navarro, Mariano Abascal, Santiago Muñoz, Albino Garcia y Alejo Barranco ante el Juzgado de Distrito de Morelos, contra el Jefe político de Yautepec que les exijia el pago de la

contribucion de exentos de la Guardia Nacional, juzgando violadas con este acto las garantías consignadas en los artículos 14 y 16 de la Constitucion; el informe de la autoridad responsable; las pruebas rendidas por parte de los quejosos; el parecer fiscal; la sentencia del inferior, y considerando:

Que no habiendo el Congreso de la Union reglamentado aun la fraccion 19 del artículo 72 de la Constitucion, ninguna otra autoridad ha tenido facultades para subsanar esta omision, expidiendo reglamentos sobre la materia, ni declarando vigentes otras leyes anteriores, por que esto importa una inovacion de las atribuciones del poder legislativo federal.

Que por esta circunstancia careció de fuerza legal la disposicion del Ejecutivo de 5 de Mayo de 1861, declarando la vigencia de la ley de 18 de Julio de 1848, que reglamentó la formacion de las Guardias.

Que además, esta disposicion debe considerarse derogada como comprendida en la ley de 9 de Mayo de 1861.

Que en consecuencia, y sin que esto menoscabe la plena facultad que tienen los Estados de la federacion, para atender á su seguridad propia en la órbita que la Constitucion les marca, el Gobierno del Estado de Morelos no fué competente para decretar las contribuciones á que se refieren los quejosos.

Que el hecho de haberse exigido dichas contribuciones, esta plenamente probado.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion, se decreta: que es de revocarse y se revoca la sentencia del C. Juez de Distrito de Morelos, y en consecuencia se declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á los CC. José Castillo, Ignacio Navarro, Mariano Abascal, Santiago Muñoz, Albino García y Alejo Barranco.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Simon Guzman.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia— México, Marzo 20 de 1874.
—*Lic. E. Ordaz*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla por el C. Antonio Benites, en nombre de su esposa Petra Zúñiga, presa por deudas de un carácter puramente civil en la cárcel de Atlixco, en donde se le obliga á moler maíz y recibe malos tratamientos.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal, en el juicio de amparo promovido por el C. Antonio Benites, en representacion de su esposa María Petra Zúñiga, contra el Juez de paz de Atlixco, por prision arbitraria, ante V. dice: que el interesado no ha justificado cual correspondia, los acertos de su escrito de queja; lejos de eso, la autoridad responsable en su informe relativo, ha manifestado cuales son los motivos que le determinaron á dictar la prision de la Zúñiga; los que sin duda alguna dieron méritos para haber procedido contra ella, y aun á haberle impuesto pena mayor, en caso que se hubiera esclarecido el delito de que se le acusó. Así pues, el acto reclamado no es atentatorio, y no viola ninguna de las garantías que la Constitucion general otorga á todo hombre.